

SISTEMA DE PARTIDOS Y PARLAMENTO EN GRAN BRETAÑA: 1993

Por GEOFFREY K. ROBERTS

SUMARIO

I. APOYO POPULAR A LOS PARTIDOS.—II. PROBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.—
III. LA AGENDA POLÍTICA.—IV. PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO.—CONCLUSIÓN.

I. APOYO POPULAR A LOS PARTIDOS

La impopularidad del Gobierno conservador, en relación con el Partido Laborista, señalada por las encuestas de opinión en los últimos meses de 1992, continuó durante 1993. A finales de febrero, los laboristas tenían una ventaja de un 8 por 100 en los sondeos de opinión (laboristas, 45 por 100; conservadores, 37 por 100; liberal-demócratas, 14 por 100) (1). Sólo un 31 por 100 de los encuestados se mostraba satisfecho con el primer ministro y el 61 por 100 se declaraba descontento. A medida que avanzaba el año se incrementó la brecha entre la popularidad del Partido Laborista y la impopularidad del Gobierno conservador. En febrero, el liderazgo de los laboristas era de un 12 por 100, y los índices de descontento con el Gobierno (80 por 100 frente a sólo un 14 por 100 satisfechos) y el señor Major (64 por 100 descontentos y 28 por 100 satisfechos) había alcanzado niveles alarmantes. Mayor número de encuestados estaban más satisfechos con el líder de la oposición, señor Smith (38 por 100) y con el señor Ashdown (43 por 100) que con el primer ministro (2). En junio, incluso simpatizantes conservadores mostraban en los sondeos un fuer-

(1) Encuesta MORI en *Sunday Times*, 31 de enero de 1993.

(2) Encuesta MORI en *The Times*, 26 de febrero de 1993.

te descontento con el Gobierno. Mientras que sólo el 16 por 100 de todos los encuestados estaba satisfecho con el señor Major, un 42 por 100 de los votantes conservadores se mostraba satisfecho, pero un 51 por 100 estaba descontento. Esto señalaba que el señor Major era el primer ministro más impopular desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Los laboristas (44 por 100) obtuvieron un liderazgo de un 15 por 100 sobre los conservadores (29 por 100; liberal-demócratas, 22 por 100). En julio, sólo un 11 por 100 de los encuestados (25 por 100 de simpatizantes conservadores) mostraba satisfacción con el primer ministro (3). En agosto, un sondeo Gallup situaba a los conservadores en un tercer lugar (laboristas, 44,5 por 100; liberal-demócratas, 27 por 100; conservadores, 23 por 100) (4). En la segunda parte del año, los mismos sondeos daban una ventaja a los laboristas frente a los conservadores de entre un 19 y un 21 por 100; más que suficiente para garantizar un Gobierno laborista con una amplia mayoría de escaños en las siguientes elecciones generales. A finales de año, el 80 por 100 seguía descontento con el Gobierno y sólo un 13 por 100 manifestó estar satisfecho (5).

Este drástico declive en la popularidad del primer ministro, del Gobierno y del Partido Conservador había comenzado en otoño de 1992 cuando Gran Bretaña salió del sistema europeo de cambio (dañando la credibilidad del señor Major, quien había insistido en que Gran Bretaña podría permanecer dentro del SME) y contrastaba agudamente con la victoria en las elecciones generales de abril de 1992. Que el declive no era únicamente una exageración propiciada por las encuestas de opinión lo revelaron otros dos indicadores a lo largo del año.

Primero, el Partido Conservador perdió dos de sus más seguras circunscripciones en dos elecciones parciales provocadas por fallecimientos de parlamentarios. En mayo perdió Newbury, donde la mayoría conservadora en las elecciones generales de 12.357 votos se convirtió en una mayoría liberal-demócrata de 22.055 (un cambio de conservadores a liberal-demócratas de un 28 por 100 en relación con el resultado de 1992). En julio, la circunscripción de Christchurch se perdió de igual manera en favor de los liberal-demócratas: una mayoría conservadora de 23.015 en las elecciones generales se convirtió en una mayoría liberal-demócrata de 16.427 votos (un cambio de conservador a liberal-demócrata de un contundente 35 por 100). En ambas circunscripciones, el colapso del voto laborista ayudó a los liberal-demócrata-

(3) Encuesta MORI en *Sunday Times*, 13 de junio de 1993, y *The Times*, 31 de julio de 1993.

(4) *Daily Telegraph*, 6 de agosto de 1993.

(5) Encuesta MORI en *The Times*, de diciembre de 1993.

tas: un signo de descoordinado, pero efectivo voto táctico por parte del pueblo, que deseaba a toda costa la derrota de los conservadores. Pero debía haberse producido también una transferencia masiva de votantes de los conservadores a los liberal-demócratas para producir cambios tan destacables, indicando la profunda insatisfacción con las políticas conservadoras, especialmente en relación con la prometida imposición del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre el fuel en el presupuesto de marzo. Estas elecciones parciales supusieron serios reveses para el gobierno y fueron clara señal de que sus simpatizantes tradicionales estaban mostrando ciertamente un descontento temporal, y quizá incluso abandonando su lealtad de voto conservador de manera más permanente. Por añadidura, redujeron la mayoría parlamentaria del Gobierno a 17, lo que hizo más vulnerable al Gobierno a las rebeliones por parte de sus propios parlamentarios.

Segundo, las elecciones locales también mostraron una pérdida de apoyo para los conservadores. Aquí la amplia ventaja para el Partido Laborista en los sondeos no se demostró en las elecciones locales; por el contrario, los liberal-demócratas se beneficiaron de las transferencias de los votos conservadores tanto como el Partido Laborista (6). En mayo, en las elecciones locales en Inglaterra y Gales, los conservadores perdieron el control de sólo un condado; muchos condados no tenían mayoría absoluta de ningún partido y muchos fueron controlados por una «coalición» de consejeros liberal-demócratas y laboristas. Hacia mediados de verano, los liberal-demócratas obtuvieron aún mejores resultados en las elecciones locales: durante junio y julio, en 48 elecciones parciales, un 35 por 100; los laboristas, un 31 por 100, y los conservadores, sólo un 28 por 100 (7).

El éxito de los liberal-demócratas en las elecciones locales se vio empañado por un resultado inusual. En septiembre, en unas elecciones parciales en el este de Londres, el partido de extrema derecha, Partido Nacionalista Británico (BNP), ganó el escaño en un área con una gran proporción de inmigrantes asiáticos. Se acusó a los liberal-demócratas locales de haber publicado propaganda electoral con un mensaje racista y se llevó a cabo una investigación local.

(6) En los dos primeros meses de 1993, por ejemplo, las elecciones locales parciales habían aportado índices de voto de un 37 por 100 para los laboristas, un 34 por 100 para los liberal-demócratas y un 27 por 100 para los conservadores en un momento en el que los sondeos otorgaban un porcentaje del 45 por 100 a los laboristas, el 17 por 100 para los liberal-demócratas y el 34 por 100 para los conservadores (*Sunday Times*, 7 de marzo de 1993).

(7) *Sunday Times*, 8 de agosto de 1993.

II. PROBLEMAS DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Para los conservadores, el año 1993 parecía estar lleno de problemas. En cuestiones de política, la situación económica no mejoraba suficientemente, y la vergüenza recayó sobre el canciller del Tesoro, señor Lamont (quien, en enero, se vio afectado también por los ataques de los medios de comunicación a causa de problemas personales) (8). También se puso en cuestión la capacidad del señor Major para ser primer ministro (especialmente por su predecesora la señora Thatcher, cuyas memorias se publicaron al final del verano y cuya pertenencia a la Cámara de los Lores —como «lady Thatcher»— le ofrecieron una plataforma para sus puntos de vista). La larga saga del Tratado de Maastricht dividía al partido. Políticas impopulares en varias áreas —especialmente en educación, impuestos, servicios sociales y sanidad pública— estaban alejando votantes y miembros. La organización del partido se enfrentaba a enormes problemas financieros.

La recesión significaba que la política financiera y económica del señor Lamont estaba siendo analizada muy de cerca y frecuentemente criticada. El, así como el señor Major, se habían convertido en muy vulnerables políticamente como resultado de la comprometida situación de septiembre de 1992, cuando se vio forzado a dar por terminada la pertenencia de Gran Bretaña al SME. Se veía también sometido a presiones para reducir las tasas de interés más rápidamente de lo que parecían inclinados a hacer, y hubo rumores de que en este asunto mantenía diferencias con el señor Major. Según un informe de febrero, cerca de la mitad de un grupo de parlamentarios conservadores preguntados deseaban que el señor Lamont fuera sustituido antes de finales de año (9). Aunque el primer ministro expresó su apoyo al señor Lamont argumentando que no podía ser acusado de las desgracias económicas del Gobierno (10), los negativos resultados de las elecciones locales y las pérdidas de las elecciones parciales de Newbury acrecentaron las presiones sobre la renuncia del señor Lamont; las sugerencias de que incluso podría encontrarse un sucesor para el propio señor Major hicieron que éste solicitara al señor Lamont su dimisión. El señor Clark (anteriormente ministro de Interior y contemplado como el más probable sucesor del propio

(8) Había recibido ayuda financiera del Gobierno y del Partido Conservador destinados a costas legales derivadas de echar a un inquilino de su casa, y la prensa y los partidos de la oposición cuestionaron la conveniencia de que se prestara tal ayuda al ministro (*Daily Telegraph*, 19 de enero de 1993).

(9) «Major's Roller-coaster», en *Sunday Times*, 7 de febrero de 1993.

(10) *The Times*, 3 de febrero de 1993.

señor Major para primer ministro) se convirtió en el nuevo canciller del Tesoro (11).

La propia permanencia del señor Major como primer ministro se convirtió en un asunto de creciente importancia a lo largo del año. En marzo, un artículo en un periódico establecía que los niveles de desempleo, la recesión económica y los conflictos internos del partido estaban todos ellos debilitando la posición del primer ministro (12). Las especulaciones sobre si el señor Clark o el señor Howard (el nuevo ministro de Interior) sustituirían al señor Major fueron parejos con ataques de la prensa a la competencia general del señor Major como primer ministro y líder del partido. Lord Rees-Mogg, anterior editor de *The Times*, afirmaba que el primer ministro era un pobre orador al que le faltaba la autoconfianza y que no tenía sentido de la estrategia. En un artículo posterior, culpaba al primer ministro, más que al señor Lamont, de meter a Gran Bretaña en el SME en 1990 (cuando el propio señor Major era canciller del Tesoro), así como por haber abandonado el sistema de cambio en 1992. «El gabinete es débil... y susceptible de cometer errores —escribió—. Para este Gobierno conservador, ahora parece como si tuviera que elegir entre Kenneth Clarke y el telón final» (13). Aunque muchos parlamentarios conservadores preferían conceder al señor Major otro año en el cual reestablecer su autoridad, y el propio señor Major insistía en que él no dimitiría y que su política era la correcta (14), continuaron las críticas. El señor Lamont consiguió una venganza por su dimisión haciendo un amargo discurso en la Cámara de los Comunes en el que dijo que el señor Major daba la impresión de estar en el cargo, pero no en el poder (15). Los líderes locales del partido mostraron un considerable descontento con el primer ministro y el Gobierno en un informe periodístico (16). En junio, la señora Thatcher hizo un llamamiento al partido para apoyar al señor Major incondicionalmente (y en octubre manifestó su apoyo personal en una entrevista personal para un periódico) (17), y en cualquier caso, el ala derecha de los conservadores no se mostraba feliz acerca de cambiar como primer ministro al señor Major por el

(11) *The Independent*, 28 de mayo de 1993.

(12) MICHAEL JONES: «Major on the Brink», en *Sunday Times*, 14 de marzo de 1993.

(13) *The Times*, 13 de mayo de 1993; lord REES-MOGG: «Clarke for Prime Minister», en *The Times*, 31 de mayo de 1993.

(14) *Sunday Times*, 16 de mayo de 1993; *The Times*, 5 de junio de 1993.

(15) *The Times*, 10 de junio de 1993.

(16) De 52 presidentes locales del Partido Conservador entrevistados, 15 deseaban un cambio de primer ministro y 34 estaban descontentos con la actividad del Gobierno (*Sunday Times*, 6 de junio de 1993).

(17) *Sunday Times*, 10 de octubre de 1993.

incluso más moderado señor Clarke. Pero las críticas del señor Major continuaron a través de la segunda mitad del año; por ejemplo, lord Parkinson, anterior ministro en un Gobierno de la señora Thatcher, criticó el liderazgo del señor Major en un artículo de revista, diciendo que los simpatizantes se sentían traicionados por la política del Gobierno (18).

La organización del Partido Conservador constituía un problema central del partido. Los acontecimientos financieros de 1992 señalaban un déficit para el año de 5,5 millones de libras esterlinas y un déficit acumulado de 19 millones. Las donaciones (19 millones de libras) eran quince veces más grandes que las cuotas de los afiliados (1,28 millones) (19). El partido mismo proclamaba tener únicamente 500.000 afiliados, pero otras estimaciones lo situaban en una cifra más baja. Por añadidura, a los cincuenta puestos para los empleados del partido eliminados tras las elecciones se sumaron otros sesenta, en un intento de reducir gastos en la sede central (20). El Partido Laborista atacó el amplio incremento de donaciones anónimas al partido y un escándalo acerca de las donaciones de personas del extranjero, algunas de las cuales más tarde llegaron a estar sometidas a procedimientos legales relativos a fraude y otros cargos, dañó la imagen del Partido Conservador (21). Aunque el Gobierno logró ganar un debate en la Cámara de los Comunes que reforzó el principio de voluntariedad en la financiación partidista, en lugar de la introducción de ayudas estatales para los partidos (22), se mantuvieron las dudas de, por ejemplo, la vinculación entre la concesión de honores (pares, caballeros y títulos menores) y el nivel de contribuciones a los fondos del Partido Conservador. En deliberado contraste, el Partido Laborista prometió proclamar el nombre de todos los donantes de sumas superiores a 5.000 o 10.000 libras esterlinas, afirmando que sólo habían recibido quince donaciones individuales superiores a las 10.000 libras durante 1992 (23). Un artículo periodístico solicitó más información pública sobre donaciones al partido: «Si la amenaza de la publicidad aleja algunas provisiones, así sería. Aquellos que temieran exponer sus donaciones políticas probablemente no deberían ser la gente de quien los partidos solicitan fondos en primer lugar» (24). Dentro del partido hubo quejas acerca de la falta de transparencia de la situación financiera del partido. En parte, para remediar esto, John Major hizo

(18) *The Times*, 20 de agosto de 1993.

(19) *Business Age*, febrero de 1993, págs. 41-43.

(20) *The Times*, 8 de enero y 6 de febrero de 1993.

(21) *The Times*, 20 de junio de 1993; «Dirty Money, Dirty Politics», en *Sunday Times*, 20 de junio de 1993; *Sunday Times*, 27 de junio de 1993.

(22) *The Times*, 23 de junio de 1993. La votación fue 284-249 a favor del Gobierno.

(23) *The Times*, 24 de junio de 1993.

(24) «Dirty money, dirty politics», en *Sunday Times*, 20 de junio de 1993.

una serie de visitas a las regiones para encontrarse con cargos locales del partido para solicitar fondos y para elevar la moral (25). Un nuevo tipo de dirección de supervisión se creó en respuesta a las críticas internas del partido, que incluían a parlamentarios, miembros del Parlamento Europeo y activistas locales entre sus miembros. Sus tareas incluían supervisión de las finanzas del partido y reclutamiento de miembros (26).

Además de estos problemas, los conservadores eran, de forma inusual para ellos, un partido profundamente dividido: a causa de diferentes actitudes ante el Tratado de Maastricht y el aumento de la integración europea derivada de ese Tratado. Los «euroescépticos» (aquellos que desconfiaban de cualquier ulterior integración europea y la consiguiente pérdida de soberanía nacional) apoyaban la convocatoria de un referéndum sobre el Tratado de Maastricht, en la creencia, con alguna justificación, de que el electorado rechazaría el Tratado (27). Cuando ese llamamiento por un referéndum fue rechazado por el Gobierno, esa facción de los «euroescépticos» en el partido se sintió libre para oponerse a la ratificación del Tratado de Maastricht en la Cámara de los Comunes por todos los medios posibles. Mientras el presidente del Partido Conservador, Norman Fowler, decía al partido: «No podemos elegir el apoyo de nuestros líderes en algunas materias de nuestro programa y atacarlo en otras» (28), aquellos opuestos al Tratado de Maastricht manifestaban que el Gobierno estaba endureciendo el debate: «El Gobierno ya no está preparado para llevar a los parlamentarios sin cargo gubernativo para ejercer cualquier juicio..., sólo un referéndum les conferiría asentimiento» al Tratado (29). El hecho de que el grupo que deseaba un referéndum, autoproclamado «vía conservadora progresiva», estuviera apoyado por la señora Thatcher y varios ex ministros, era imposible de ignorar. Pero los rebeldes del Grupo Parlamentario eran sólo una minoría (aunque, con la pequeña mayoría del Gobierno, una minoría que podía resultar molesta) y su rechazo de apoyo hacia el Gobierno llevó a sancionar a algunos de sus miembros. Por ejemplo, en noviembre, uno de los líderes rebeldes, sir George Gardiner, no fue reelegido para el Comité Ejecutivo del Grupo Parlamentario Conservador (el «comité 1992»).

Los problemas del Partido Laborista eran menos serios. La autoridad del líder del partido, John Smith, no se ponía en duda, aunque algunos del partido se mostraban disconformes con sus intervenciones en la Cámara de los Co-

(25) *The Times*, 7 de septiembre de 1993.

(26) *The Times*, 20 de mayo, 19 y 22 de junio de 1993.

(27) *Sunday Times*, 11 de abril de 1993.

(28) *The Times*, 6 de marzo de 1993.

(29) *The Times*, 11 de marzo de 1993, citando al señor Budgen, un parlamentario conservador opuesto al Tratado de Maastricht.

munes, especialmente en el tiempo de preguntas cuando tenía que enfrentarse con el primer ministro, así como su fracaso para desarrollar una estrategia de partido: «En tanto que no inspiraba a muchos de los que le apoyaban, dejaba solos a los dubitativos. Falta un sentido de dirección» (30). En términos generales, el partido estaba más unido de lo que había estado en muchos años (incluso aunque algunos temas lo dividieran: véase *infra*). Financieramente, el partido estaba también en una posición más fuerte de lo que había estado durante años: en 1992 tenía un superávit de ingresos sobre sus gastos de 1,3 millones de libras, permitiendo contratar veintiocho organizadores regionales a tiempo completo para desarrollar estrategias electorales en escaños marginales (31). Sin embargo, dos asuntos mayores enfrentaron al partido, los cuales podrían tener importantes consecuencias para el futuro y para sus esperanzas de formar el próximo Gobierno.

El primero de estos asuntos, y para el Partido Laborista el menos significativo, era la reforma electoral. El Partido Laborista se mostraba de acuerdo con la creación de una comisión, bajo la dirección de lord Plant (un profesor de Ciencia Política), para examinar sistemas electorales alternativos que pudieran utilizarse en el Reino Unido en todo tipo de elecciones: para los Gobiernos locales, para la Cámara de los Comunes y para las Asambleas Regionales de Escocia y Gales, que el Partido Laborista esperaba introducir. Había aumentado el apoyo hacia algún tipo de reforma electoral dentro del partido y los sindicatos afiliados al Partido Laborista. Tras sucesivas derrotas en las elecciones generales, se asumió el punto de vista de que, sin un sistema electoral «más favorable», el Partido Laborista podría no volver nunca a formar Gobierno. Pero otros, incluidos algunos miembros de la jerarquía del partido, veían la reforma electoral como innecesaria e incluso peligrosa —para el partido y para el sistema parlamentario británico—. De 52 parlamentarios laboristas elegidos en 1992, 34 estaban a favor de la reforma electoral y 13 se oponían a ella. El señor Kinnock, el anterior líder del partido, y el Sindicato General de Trabajadores y del Transporte (TGWU), uno de los más grandes sindicatos en Gran Bretaña, estaban entre los que se encontraban a favor de la reforma (32). En abril informó la Comisión Plant. Por un estrecho margen (9 votos frente a 7), apoyaba un nuevo sistema electoral para las elecciones a la Cámara de los Comunes denominado sistema de «voto suplementario». En este momento un informe mostró que el 59 por 100 de los parlamentarios laboristas se mostraban fa-

(30) *Sunday Times*, 26 de septiembre de 1993.

(31) *The Times*, 14 de agosto de 1993.

(32) *The Times*, 7, 9 y 27 de enero de 1993.

vorables a algún tipo de reforma electoral; por el contrario, el 36 por 100 deseaba mantener el sistema existente (33). En mayo, John Smith —el mismo no favorable a la reforma electoral— propuso que el congreso del partido acordara que el próximo Gobierno laborista propusiera un referéndum sobre la reforma electoral. El congreso lo aceptó, pero sólo por una estrecha mayoría; pero al mismo tiempo el congreso expresó su propio apoyo al sistema electoral existente (34). Esta muy limitada tolerancia hacia la idea de una reforma electoral por el Partido Laborista no ofrecía aliciente para aquellos simpatizantes laboristas o liberal-demócratas, que deseaban una cooperación más estrecha entre los partidos, y quienes buscaban algún tipo de coalición gubernamental en el futuro, puesto que los liberal-demócratas exigirían de tal coalición que apoyara la reforma electoral.

El segundo tema era el poder de los sindicatos dentro del partido. En Alemania, por ejemplo, los sindicatos no podían legalmente afiliarse o hacer donaciones directas a ningún partido político (aunque un amplio número de sindicalistas alemanes votaban regularmente al Partido Socialdemócrata). Sin embargo, en Gran Bretaña muchos de los sindicatos más grandes estaban afiliados oficialmente al Partido Laborista, apoyan financieramente al partido a nivel local y nacional y desempeñan importantes papeles en la selección de la dirección del partido (y aun decrecientes cifras de miembros de los sindicatos votan actualmente al Partido Laborista). John Smith anunció que insistiría en que se redujera el poder de los sindicatos dentro del partido. Deseaba que su fuerza de voto en el congreso del partido disminuyera, se modificara su papel en seleccionar al líder y al vicelíder del partido y se eliminara o redujera su participación en la selección de los candidatos parlamentarios. La imagen del Partido Laborista todavía dominante de los sindicatos en sus procedimientos y políticas resultaba electoralmente dañina. En febrero, un informe sobre la reforma organizativa del partido incluía una revisión del papel de los sindicatos. Roy Hattersley, un anterior vicelíder, reclamaba un cambio en la relación entre los sindicatos y el partido: «Los laboristas deben convertirse en un partido de ideas, no de intereses creados» (35). John Smith

(33) *The Times*, 1 de abril de 1994. El nuevo sistema combinaba elementos de los sistemas electorales francés e irlandés. Se mantendría el sistema de escaño uninominal por circunscripción. Los electores podrían señalar dos candidatos por orden de preferencia. Si ningún candidato obtenía una mayoría suficiente de «primeras preferencias», entonces los dos candidatos con las cifras más altas de primeras preferencias sumarían sus segundas preferencias para así decidir al ganador.

(34) *The Times*, 20 de mayo de 1993 y 2 de octubre de 1993. El congreso del partido votó a favor de la representación proporcional para las elecciones al Parlamento Europeo.

(35) *The Times*, 23 de febrero de 1993.

anunció su intención de introducir el principio de «un miembro, un voto» en el próximo congreso del partido, pero la dirección del partido se mostraba dividida acerca de este tema, y muchos de los sindicatos (cuyos votos, irónicamente, se necesitarían para introducir la reforma) se oponían (36). La Comisión Ejecutiva Nacional del partido apoyó al señor Smith en este tema por 20 votos frente a 7 (37). Algunos miembros de la dirección del partido veían una disminución del poder de los sindicatos dentro del Partido Laborista (que los sindicatos habían ayudado a crear originariamente) como un cambio irrevocable en la naturaleza del partido; Tony Benn, por ejemplo, dijo en una entrevista de prensa que «el Partido Laborista sin los sindicatos es una porción como los liberales...» (38). En el congreso del partido, el señor Smith resultó victorioso, pero por un estrecho margen. Como un compromiso, se permitiría a miembros de los sindicatos afiliados al Partido Laborista votar a los candidatos parlamentarios si pagaban una pequeña cuota de afiliación. Se reducía (aunque no se eliminaba) el poder de voto de los sindicatos dentro del congreso del partido y para seleccionar al líder y al vicelíder del Partido Laborista. *The Economist* vio el cambio menos como victoria para el señor Smith de lo que en principio se había pensado: «... curiosamente, su efecto había sido mostrar cuán fuertes permanecían los sindicatos dentro del Partido Laborista» (39).

En otoño surgió un potencial problema de división para el desarrollo del partido. El congreso del partido decidió ejercer la discriminación positiva para asegurar que se eligieran más mujeres como parlamentarias laboristas. En la mitad de las circunscripciones habitualmente logradas por otros partidos, pero en las que los laboristas de forma realista tuvieran la esperanza de ganar las siguientes elecciones y en mitad de las circunscripciones obtenidas por los laboristas, pero donde el parlamentario afectado no se presentara a las próximas elecciones, las listas de las que seleccionaría al candidato laborista deberían incluir *sólo* candidatas femeninas. La Comisión Ejecutiva Nacional decidiría en qué escaños se aplicaría esa regla. Muchas organizaciones loca-

(36) *The Times*, 13 y 18 de mayo de 1993; 3 de junio de 1993.

(37) *The Times*, 20 de julio de 1993.

(38) *The Times*, 25 de septiembre de 1993.

(39) *The Economist*, 2 de octubre de 1993, pág. 27. Un informe de opinión de los miembros de los sindicatos que apoyaban al Partido Laborista mostraba que sólo un 26 por 100 deseaba que los sindicatos se vieran implicados en la selección de candidatos y sólo un 7 por 100 deseaba mantener el «voto en bloque» de los sindicatos en el congreso del partido, en tanto que los sindicatos afiliados al partido podrían arrojar un voto igual a todos sus afiliados: a menudo, sumando varios cientos de miles de votos (*Sunday Times*, 12 de septiembre de 1993).

les del partido se opusieron al ver alterada su tradicional autonomía para seleccionar a los candidatos, y algunos políticos laboristas apuntaron que quizá la regla podría resultar ilegal bajo las normas sobre discriminación sexual, un punto de vista defendido también por un experto legal (40). Una encuesta de opinión mostraba que el 61 por 100 de los votantes se oponía a la regla y sólo un 28 por 100 estaba a favor (41). Hubo sugerencias para que el partido extendiera esa discriminación positiva a las minorías étnicas para aumentar el número de no blancos en la Cámara de los Comunes (42). El más temprano ejercicio en discriminación positiva a favor de las mujeres —el requisito de que los parlamentarios votaran por al menos cuatro mujeres entre su selección para el «gabinete en la sombra»— fue saboteado por parlamentarios masculinos, que deliberadamente votaron por mujeres para las que resultaba improbable asegurar su elección. Esta disparidad de votos significó que sólo tres mujeres resultaran elegidas, en comparación con las cuatro elegidas el año precedente (43).

Más generalmente, la tradicional división dentro del partido entre el ala izquierda y el ala derecha se había transformado en un conflicto entre «modernizadores», empeñados en hacer del partido a cualquier precio un partido de Gobierno, y «tradicionalistas», quienes deseaban que el partido permaneciera diferenciado, especialmente en ideología y en sus relaciones con los sindicatos. John Smith, aunque simpatizante de los «modernizadores», parecía poner el énfasis en integrar estas diferentes facciones dentro del partido. Entre los reformadores estaba Roy Hattersley (anteriormente vicelíder del Partido Laborista), quien escribió: «Un partido radical no puede basar sus políticas para 1997 en las injusticias de 1931... Desde hace mucho las perspectivas del laborista se han visto perjudicadas por la pretensión de que la lucha intestina de facciones constituye un serio debate» (44). Los «tradicionalistas» incluían el «Grupo Tribune» (denominados así por su periódico, *Tribune*), que publicaba un panfleto defendiendo los vínculos del Partido Laborista con los sindicatos y sus políticas de alta imposición para lograr la distribución de la riqueza (45). Gordon Brown, un miembro directivo de la facción «modernizadora», en un

(40) DAVID PANNICK («Does Labour policy on women break the law?», en *The Times*, 9 de noviembre de 1993) estimaba que la norma podría también vulnerar la legislación de la Comunidad Europea.

(41) *The Times*, 18 de diciembre de 1993.

(42) *Sunday Times*, 14 de noviembre de 1993.

(43) *The Times*, 21 de octubre de 1993.

(44) «How Labour can combine principles with popularity», en *Sunday Times*, 10 de enero de 1993.

(45) El panfleto se titulaba: «What's left?» (*The Times*, 14 de septiembre de 1993).

discurso del 17 de agosto, rechazaba los impuestos como un instrumento de redistribución de la riqueza. Consciente del daño causado al Partido Laborista en las elecciones de 1992 por su imagen de partido de «altos impuestos», dijo: «Sobre los impuestos, el próximo Gobierno laborista no impondrá impuestos por su propio bien. Impondremos tasas sólo si incrementa las oportunidades para los individuos o para la comunidad» (46). El partido se veía también marcado por signos de que la «Militant Tendency», un grupo radical socialista que había intentado trabajar dentro del partido, estaba ahora preparando enfrentarse a los escaños contra los candidatos laboristas en las próximas elecciones generales, y estaba ganando apoyo dentro de los sindicatos y de grupos de presión tales como movimientos en contra del racismo o en contra de los intentos de privatización del suministro de agua en Escocia (47).

Para los liberal-demócratas fue relativamente un año sin acontecimientos importantes. Las dos victorias en elecciones parciales en Newbury y Christchurch fueron motivo de júbilo, y en mayo obtuvieron unos buenos resultados en las elecciones locales; pero el partido que todos los escaños parlamentarios de tendencia conservadora había logrado en las elecciones parciales entre 1987 y 1992 habían sido ganados de nuevo por los conservadores en las elecciones generales.

El líder del partido, señor Ashdown, aclaró que el partido no insistiría en un compromiso de reforma electoral como precondition de un pacto con el Partido Laborista hasta después de las próximas elecciones, declarando que sería una «negación de la democracia»; los liberal-demócratas presentarían sus propias políticas a esas elecciones (48). Oficialmente, los liberal-demócratas seguían disponibles como compañeros para cualquier gran partido tras las próximas elecciones. Sin embargo, la extraordinaria similitud entre las políticas liberal-demócratas y las que propugnaban los «modernizadores» del Partido Laborista, el hecho de que, a nivel local, existieran frecuentemente pactos y acuerdos entre los liberal-demócratas y los laboristas, pero en escasas ocasiones entre los liberal-demócratas y los conservadores, y la presión de algunos parlamentarios liberal-demócratas y de activistas de las entidades locales del partido para excluir cualquier posibilidad de mantener a un minoritario Gobierno conservador en el puesto, todo indicaba que los liberal-demócratas buscaban al Partido Laborista como su futuro compañero de Gobierno (49).

(46) *The Economist*, 21 de agosto de 1993, pág. 24.

(47) *Sunday Times*, 30 de mayo de 1993.

(48) *The Times*, 13 de mayo y 31 de julio de 1993.

(49) *The Times*, 21 de septiembre de 1993.

El éxito electoral de los liberal-demócratas, especialmente en el sudeste de Inglaterra, causó preocupación tanto al Partido Laborista como al Conservador de cara a las próximas elecciones generales. Pero los indicadores mostraban que gran parte del apoyo obtenido por los liberal-demócratas no se basaba en una simpatía positiva hacia el partido, sus líderes o sus políticas, sino que, por el contrario —según admitió el propio señor Ashdown—, era una reacción frente a las políticas tradicionales y sin imaginación de otros partidos. Durante 1993 el señor Ashdown empleó seis meses en contactos personales con gente de diferentes áreas y diferentes clases sociales, y afirmó identificar el resultado como un modo de «antipolítica» (50). Un fenómeno observable en muchos otros países recientemente, tales como los Estados Unidos de América (la candidatura de Perot en 1992) y Alemania. Los comentaristas diagnosticaron que las causas del problema eran, por ejemplo, el hecho de que «Gran Bretaña arrastraba un Gobierno débil enfrentado a una ineficaz oposición» (51) y la debilidad de la organización partidista (52). *The Economist* estimaba que los partidos británicos generalmente mostraban descontento e impopularidad incluso entre sus propios miembros. Estaban pobremente organizados, faltos de talento y de recursos financieros. Su afiliación disminuía y envejecía, con una afiliación activa, tanto en el Partido Laborista como en el Conservador, que no excedía en mucho de 200.000 afiliados en cada partido (53). Esta tendencia explicaría la reciente volatilidad del voto y en las respuestas en los sondeos de opinión a las preferencias partidistas.

III. LA AGENDA POLITICA

La agenda política en 1993 estuvo dominada por dos temas: la situación económica y el debate sobre la ratificación del Tratado de Maastricht. Ambos temas fueron los causantes de muchos de los problemas de la impopularidad del Gobierno y de las divisiones dentro del Partido Conservador (véase *supra*).

Aunque había claros indicadores durante 1993 de que la economía del Rei-

(50) «General Ashdown joins the fight», en *Sunday Times*, 19 de septiembre de 1993.

(51) «Where is Labour big idea?», en *Sunday Times*, 26 de septiembre de 1993.

(52) Un periodista criticaba la incompetencia de la Oficina Central Conservadora y la dificultad de conseguir líderes políticos de talento para actuar como su presidente, especialmente como ningún presidente de partido desde 1945 había llegado a convertirse en líder del partido: SIMON JENKINS: «Black Hole in Smith Square», en *The Times*, 15 de septiembre de 1993.

(53) *The Economist*, 25 de septiembre de 1993, págs. 29-30.

no Unido estaba entrando en una fase de recuperación tras la larga recesión, seguían los problemas económicos. El más significativo de ellos (y los había estrechamente ligados, desde luego) era el incremento del déficit en el sector público, causado especialmente por el gasto creciente en pagos a la Seguridad Social y al nivel del desempleo. El desempleo persistió cercano a los de 3 millones a lo largo del año. En enero era de 3,06 millones (10,9 por 100 de la fuerza de trabajo), y a finales de año bajó sólo a 2,78 millones (9,9 por 100 de la fuerza de trabajo) (54). Esta era sólo la segunda ocasión en el siglo XX en la que el desempleo superaba los 3 millones (la primera fue en 1986). Estos niveles de desempleo contribuían a la gran proporción de gasto público dedicada al sistema de seguridad social: 29 por 100 (comparado con el 15 por 100 en salud y servicios sociales, 12 por 100 en educación y 9 por 100 en defensa) (55). Y desde luego los desempleados no contribuían a los ingresos públicos mediante imposición directa. Un tema, tan simbólico como pragmático, asociado con el desempleo era la recomendación del Gobierno de que las minas de carbón no rentables serían cerradas. La protesta pública y la oposición de diversos parlamentarios conservadores llevó al Gobierno a reconsiderar la escala del cierre. La Comisión de la Cámara de los Comunes sobre Empleo solicitó posponer los cierres hasta que una más sistemática revisión de la política energética pudiera llevarse a cabo, y la Comisión de Comercio e Industria sugirió un plan para mantener abiertas algunas de las minas; este plan, estimaba la Comisión, sería menos costoso que el cierre, puesto que el cierre implicaría costes de nuevos pagos y programas de readaptación (56). El Gobierno mismo estaba dividido en torno al grado en que las minas de carbón deberían obtener subvenciones. El señor Heseltine, secretario de Estado para Comercio e Industria, obtuvo en marzo una aprobación parlamentaria para que revisara la lista de cierres de minas de carbón, pero continuaron las protestas contra el programa de cierres.

Por otra parte, tanto la tasa de inflación y las de intereses se habían reducido a lo largo del año. A finales de 1992 la inflación era de un 2,6 por 100; en febrero alcanzó el 1,7 por 100 (el nivel más bajo en veinticinco años), y en agosto había bajado al 1,4 por 100. Las tasas de interés se recortaron a un 6 por 100 en enero, las más bajas desde 1977, aunque representantes de la industria deseaban mayores reducciones.

A causa del cambio de procedimiento, 1993 fue un año en el que, de ma-

(54) *Employment Gazette*, marzo de 1994, pág. S14. Los datos están referidos al total, sin ajustes temporales.

(55) *The Independent*, 21 de mayo de 1994.

(56) *The Times*, 22 y 30 de enero de 1993.

nera insólita, se presentaron al Parlamento *dos* presupuestos (y por dos diferentes cancilleres del Tesoro). Se tomó la decisión de cambiar de un presupuesto marzo-abril a un presupuesto al final del año y combinar propuestas impositivas con planes de gasto público. Estos dos presupuestos, de hecho, se enfrentaron con iguales problemas: la necesidad de reducir la diferencia creciente entre el gasto público y los ingresos, pero sin retrasar o entorpecer el proceso de recuperación económica. En enero, la Comisión de la Cámara de los Comunes sobre Asuntos del Tesoro había alertado de las dificultades para reducir el déficit del sector público cuando la recuperación económica era todavía frágil e incierta, y en febrero, el panel de asesores económicos del Gobierno (los también llamados «siete sabios») habían advertido en contra del incremento de los impuestos en el caso de que tales aumentos pusieran en peligro la recuperación económica (57). El primer presupuesto, presentado en marzo por el señor Lamont, ofrecía una estimación del déficit del sector público de 50 billones de libras para el año financiero entrante, a menos que se tomaran medidas para reducirlo, y proponía, entre otras, incrementos de impuestos, cambios en el impuesto sobre la renta y la introducción del impuesto sobre el valor añadido (IVA) sobre fuentes energéticas domésticas, tales como electricidad, gas y carbón, en dos fases: en 1994, mitad del nivel medio, y en 1995 (al nivel completo del 17,5 por 100). Gran parte del déficit del sector público, estimaba el canciller del Tesoro, había sido producto de la recesión, de modo que se vería reducido por la recuperación económica, pero un déficit que ascendía a un 8 por 100 del producto interior bruto no podía continuar (58). El Partido Laborista era capaz de utilizar el incremento de los impuestos presupuestarios para acusar a los conservadores de romper sus promesas electorales de 1992 de no subir la imposición directa o de extender el impuesto sobre el valor añadido (59).

Los crecientes costes de los programas del Estado de bienestar fueron una causa significativa del déficit del sector público. En junio, el ministro responsable de la seguridad social dijo que el crecimiento real (descontando los efectos de la inflación) en el gasto de seguridad social fue del 3,3 por 100 al año, mucho más que la habilidad de la economía para pagar (60). El señor Major dijo que el Gobierno estaba preparado para llevar a cabo una radical aproximación a los gastos del Estado del bienestar, incluyendo educación, servicios sociales y pagos de la Seguridad Social (61). El señor Clarke, el

(57) *The Times*, 14 de enero y 20 de febrero de 1993.

(58) *Sunday Times*, 21 de marzo de 1993.

(59) *The Times*, 18 de marzo de 1993.

(60) *The Times*, 24 de junio de 1993.

(61) *Daily Telegraph*, 21 de mayo de 1993.

nuevo canciller del Tesoro, anunció su disposición a revisar todos los aspectos del gasto público y buscar unas vías para unos costes más eficientes para cumplir los compromisos políticos (62). Desde que los conservadores llegaron al poder en 1979, el gasto público se había incrementado en un 260 por 100 en términos absolutos y más de un 25 por 100 en términos reales (al tener en cuenta la inflación), ¡y esto desde un Gobierno con fama de reemplazar el papel del Estado por el de mercado! (63). Como avance de su presupuesto de noviembre, el señor Clarke anunció en 1994 que no habría un anormal incremento de pago para empleados en el sector público, a menos que probados incrementos en la productividad pudieran justificar tales incrementos (64). Expertos económicos y representantes de la industria y el comercio pusieron en guardia al señor Clarke frente a otros aumentos en la carga impositiva en su presupuesto del otoño, afirmando que la recuperación económica se vería dañada por tales incrementos (65). El presupuesto confirmó el futuro aumento impositivo ya anunciado por el señor Lamont en marzo e impuso unos pocos, más bien menores, nuevos incrementos en la imposición, pero también trató de restringir el crecimiento del gasto público con una previsión de alcanzar el 45,5 por 100 del producto interior bruto en 1993-94 (comparado sólo al 44 por 100 cuando los conservadores entraron en el Gobierno en 1979 y sólo a un 39 por 100 en 1989) (66). El señor Clarke era consciente de que incrementar el impuesto sobre la renta de los niveles de ingresos más altos podría resultar contraproducente: aquellas ganancias de más del 5 por 100 de ingresos pagaban un 34 por 100 del total de ingresos por impuestos sobre la renta recaudados (pero sólo pagados un 24 por 100 en 1978-79, cuando los niveles de impuestos sobre la renta eran superiores) y aquellos que recibían más del 10 por 100 de rentas pagaban un 45 por 100 del total de los impuestos sobre la renta recaudados (pero habían pagado en 1978-79 sólo un 34 por 100) (67). A lo largo del año se anunciaron dos pequeños pero significativos futuros recursos de ingreso adicional para el Gobierno: uno era la introducción, en 1995, de una lotería nacional por la que el Gobierno obtendría unos ingresos regulares, y otro fue el anuncio por la Reina de que, en el futuro, pagaría impuesto sobre la renta por sus ingresos privados.

(62) *The Times*, 16 de junio de 1993.

(63) *Sunday Times*, 20 de junio de 1993.

(64) *The Times*, 15 de septiembre de 1993.

(65) *The Times*, 20 de octubre y 13 de noviembre de 1993.

(66) *The Economist*, 4 de septiembre de 1993, pág. 29.

(67) *Sunday Times*, 7 de noviembre de 1993.

Un tema particularmente controvertido que afectaba al nivel de gasto público fue la decisión de reducir el gasto militar. Vinculada a esta cuestión estaba la de los compromisos militares que mantenía el Reino Unido. Había que suministrar unidades militares a Irlanda del Norte a causa de la continuación del terrorismo. Había soldados británicos también en Hong Kong, Belize, Chipre y otras bases exteriores. Incluso la retirada de las fuerzas británicas de Alemania tras la reunificación no había provocado una gran reducción en los gastos de defensa. «No podemos estar en todas partes ni hacer de todo», dijo el secretario de Asuntos Exteriores, señor Hurd, en un discurso en el que se refería a las peticiones de una mayor implicación militar de Gran Bretaña en el conflicto bosnio (68). Estos compromisos habían provocado en el Ministerio de Defensa algunos retrasos en las planeadas reducciones de soldados previstas en la *Revista de Defensa* en 1991 tituladas «Options for Change» (69). En efecto, las reducciones en funcionarios empleados por el Ministerio de Defensa prometían grandes ahorros: su número sobrepasaba al de soldados en el Ejército (139.000 funcionarios civiles; 126.000 soldados) (70).

Durante 1993, el segundo tema político fue el Tratado de Maastricht. La situación era que el Gobierno deseaba obtener la aprobación de la Cámara de los Comunes para el Tratado, incluyendo concesiones especiales (por ejemplo, en políticas sociales) negociadas por el primer ministro. Varios parlamentarios conservadores no deseaban apoyar la ratificación del Tratado. Los Partidos Laborista y Liberal-Democrático querían ratificar el Tratado, pero sin especiales concesiones. Aquellos que se oponían al Tratado hábilmente utilizaban el argumento de que el pueblo del Reino Unido no había tenido oportunidad de expresar su opinión sobre lo que se contemplaba como un gran cambio constitucional; los pueblos de Francia, Dinamarca e Irlanda, por ejemplo, habían tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el Tratado mediante referéndum. «El primer ministro y los líderes de la oposición habían determinado empujar al pueblo británico a un proyecto que sabían que el pueblo rechazaría si se les permitía pronunciarse sobre la materia. Esto es un ejercicio sin precedentes para una democracia parlamentaria y el más deplorable», escribió un crítico del Tratado (71). Se organizó una campaña por el referéndum, financiada por parlamentarios de los tres grandes partidos; en

(68) *The Times*, 28 de enero de 1993.

(69) *The Times*, 4 de febrero de 1993.

(70) *Sunday Times*, 19 de septiembre de 1993.

(71) CONOR CRUISE O'BRIEN: «Liberty sacrificed on the altar of theory», en *The Times*, 20 de febrero de 1993.

un anuncio en la prensa proclamaban que un 73 por 100 de los parlamentarios secundaban el referéndum (72). Una encuesta de opinión mostraba que el 67 por 100 del público apoyaba un referéndum y un 17 por 100 se oponía. Si había un referéndum, el 35 por 100 votaría en contra de la ratificación británica del Tratado de Maastricht y sólo un 27 por 100 votaría a favor (con un 38 por 100 de indecisos) (73). Los afiliados locales del Partido Laborista indicaban una fuerte oposición al Tratado (74). En julio, el Gobierno resultó derrotado en una votación en la Cámara de los Comunes en la cual los opositores conservadores al Tratado se unieron al Partido Laborista para apoyar la aplicación de los aspectos de política social del Tratado al Reino Unido: el resultado fue de 324 contra 316. (Los conservadores «rebeldes», desde luego, no deseaban incluir los aspectos de política social, pero esperaban que esta maniobra forzara al primer ministro a abandonar la negociación en cualquier caso). El primer ministro se vio forzado a pedir una moción de confianza en la Cámara de los Comunes (lo que obtuvo), y de esta forma la ratificación del Tratado consiguió el apoyo de la Cámara de los Comunes (75). En julio, los opositores al Tratado intentaron evitar la ratificación a través de un recurso ante el Tribunal Supremo (*High Court*) sobre la base de su ilegalidad, pero no prosperó. El primer ministro, en un artículo en *The Economist*, defendía su visión de la Unión Europea. «Nos centraríamos primero en los objetivos de Europa antes de debatir sus instituciones», afirmaba, y deseaba que «la Unión Europea abandonara su visión centralista». «El desafío de esta generación de líderes europeos es construir una Comunidad para toda Europa... Resulta claro ahora que la Comunidad seguirá siendo una unión de independientes. Estados nacionales soberanos. Eso es lo que sus pueblos desean» (76).

Entre otros asuntos políticos de importancia, Irlanda del Norte continuaba siendo un problema sin aparente solución. En abril, unas explosiones de bombas en Londres, de las que el Ejército Republicano Irlandés (IRA) asumió la autoría, causaron unos daños de un billón de libras e hirieron a 47 personas. En la propia Irlanda del Norte, asesinatos terroristas, tanto del IRA como de los «leales», quienes apoyaban mantener la vinculación con Gran Bretaña, provocaron numerosas muertes de civiles y militares. Siguiendo una se-

(72) *The Times*, 28 de marzo de 1993.

(73) Encuesta MORI en *The Times*, 3 de abril de 1993.

(74) *The Times*, 18 de abril de 1993.

(75) *The Times*, 23 y 24 de julio de 1993.

(76) JOHN MAJOR: «Raise your eyes, there is a land beyond», en *The Economist*, 25 de septiembre de 1993, págs. 23-27.

rie de conversaciones entre políticos británicos e irlandeses de varios partidos, conversaciones oficiales entre el primer ministro del Reino Unido y la República de Irlanda condujeron a una Declaración conjunta firmada en Londres el 15 de diciembre. En ella se establecía que el Reino Unido era oficialmente neutral con respecto a la posible reunificación de Irlanda del Norte con la República de Irlanda, los unionistas habían asegurado que votarían cualquier cambio que afectara a Irlanda del Norte y el IRA ofrecía la oportunidad de conversaciones con el Gobierno una vez que hubieran renunciado a la violencia.

El mayor ejemplo de influencia política de un grupo de presión, atravesando lealtades partidistas, fue la legislación que permitiría a las tiendas abrir los domingos. Muchas, de hecho, ya abrían los domingos, pero a menudo vulneraban la ley haciéndolo. Iglesias, sindicatos, representantes de comerciantes independientes y amplias cadenas de tiendas estaban entre los que se oponían a la legislación. En diciembre, la Cámara de los Comunes aprobó por 333 votos frente a 258 permitir la apertura los domingos con un horario limitado.

Una investigación judicial comenzó a indagar en la implicación de ministros y agencias del Gobierno en un escándalo que suponía la venta secreta de armas y de equipo a Iraq, a pesar de la prohibición oficial de tales ventas. Una sentencia judicial, que implicaba la persecución de un hombre de negocios por vulnerar estas prohibiciones, había puesto de manifiesto después que el hombre de negocios había actuado con el conocimiento de ministros y del servicio de inteligencia. Eminentes políticos, incluyendo a Margaret Thatcher, fueron llamados a testificar en la investigación, que había de continuar en 1994.

IV. PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO

El período de sesiones parlamentario, que finalizó en agosto de 1993, fue inusualmente largo al haber comenzado justo después de las elecciones de 1992. Quizá esto fue un factor que alentó a los parlamentarios a votar en favor de un incremento salarial para ellos mismos de un 2,7 por 100 en 1994 en un momento en que los empleados públicos estaban sujetos a una política de ninguna subida (77).

Se hicieron públicos los datos sobre la composición y características de los parlamentarios en 1992. De los 270 parlamentarios laboristas, 172 reci-

(77) *The Times*, 4 de noviembre de 1993.

bieron financiación de los sindicatos (78). Entre los parlamentarios elegidos por primera vez para la Cámara de los Comunes, dos tercios de parlamentarios conservadores llevaban al menos veinte años como tales, pero sólo uno de cada cinco parlamentarios laboristas esperaba igualar ese mandato, y un 60 por 100 de los parlamentarios conservadores (pero sólo un 43 por 100 de los nuevos parlamentarios laboristas) esperaban llegar a ser ministros (79). El registro de actividades de los parlamentarios revelaba que cerca de la mitad de los parlamentarios conservadores habían pagado consultas con negocios, comercios u otras organizaciones, y cerca de la mitad de ellos tenía una dirección en compañías de negocios. Sólo 19 parlamentarios laboristas habían pagado consultas y sólo 12 eran directivos de compañías (80).

El crecimiento de los vínculos de negocios y comerciales de los parlamentarios era uno de los tópicos controvertidos en relación con el procedimiento parlamentario a lo largo del año. Muchos comentaristas estimaban que había de deplorarse esa evolución. *The Economist* sugería que el registro de intereses de parlamentarios debería extenderse para compeler a los parlamentarios a dar los nombres de los clientes con los que tenían relación a través de sus vínculos con compañías de «relaciones públicas» (en otras palabras, es decir, de aquellos que podrían hacer presión a través de los parlamentarios) y que pudieran conocerse los montantes de las cantidades de pagos recibidos por tales presiones. Se sugirió, asimismo, que hubiera un mayor control sobre el trabajo que desempeñaran anteriores ministros y funcionarios después de que hubieran abandonado sus puestos oficiales. Dado el incremento en la desregulación y la introducción de «disciplinas de mercado» en muchos campos de la vida pública, *The Economist* insistía en que «mercados y candor deberían ir juntos» (81). El anterior vicelíder del Partido Laborista, Roy Hattersley, también criticaba esta tendencia. «El uso del *status* y de la influencia parlamentaria para asegurar objetivos comerciales degrada la democracia», escribió. Sugería que la existencia de un registro de intereses de parlamentarios había legitimado las presiones de los parlamentarios para obtener ganancias comerciales y proponía que se prohibiera el pago de influencias para todos los parlamentarios (82). Por otra parte, la Sociedad Hansard (un grupo de políticos, politólogos y otros que investigaban asuntos relacionados con el Parlamento) proponía en uno de sus informes que hu-

(78) *The Times*, 3 de marzo de 1993.

(79) *The Times*, 25 de marzo de 1993.

(80) *The Times*, 12 de enero de 1993.

(81) «Power tends to corrupt», en *The Economist*, 3 de julio de 1993, pág. 36.

(82) «End the cheap farce of "MPs for hire"», en *Sunday Times*, 1 de agosto de 1993.

biera más consultas sobre intereses afectados en todos los niveles del procedimiento legislativo (83).

Los intentos para reformar los procedimientos de la Cámara de los Comunes no produjeron aún ningún resultado. No se adoptaron la introducción de sesiones matutinas en la Cámara de los Comunes (para eliminar la necesidad de continuar hasta muy tarde tan a menudo) ni la extensión de las sesiones legislativas normales de uno a dos años (permitir más tiempo para pasar la legislación): «... ninguna institución es más conservadora que el Parlamento mismo» (84).

Un informe del Gobierno mostró que alrededor de tres millones de votantes (7 por 100) no estaban en el registro electoral de 1991. Muchos no habían podido registrarse a causa del *poll tax* (85). Puesto que las propuestas para la revisión de los límites de las circunscripciones para las próximas elecciones generales estaban basadas en ese registro electoral (y no en datos del censo), estos votos «desaparecidos» podrían afectar las oportunidades de los diferentes partidos que ganaban en circunscripciones afectadas por alteraciones en su demarcación (86).

V. CONCLUSION

No cabe duda al decir que la política de partidos —y del mismo modo del Gobierno parlamentario— en Gran Bretaña está cambiando, aunque es menos fácil coincidir sobre en qué dirección se producirá el cambio. El declive de la financiación de los tradicionales aliados empresariales de los conservadores, la disminución de la vinculación entre los sindicatos y el Partido Laborista, la disposición de los periódicos a asociarse más estrechamente con un partido (el *Mirror* y el Partido Laborista; *The Times* y el Partido Conservador) para criticar a su «propio» partido son indicadores de tal cambio. «La sociedad se está despolitizando en todas partes, y Gran Bretaña no es una excepción» (87). Las próximas elecciones generales tendrán lugar al menos den-

(83) *The Times*, 3 de febrero de 1993.

(84) PETER: «Parliament goes off the rails», en *The Times*, 5 de diciembre de 1993.

(85) GEOFFREY K. ROBERTS: «Partidos y Parlamento en Gran Bretaña: 1989-90», en *Revista de Estudios Políticos*, núm. 73 (julio-septiembre 1991), págs. 304-305.

(86) *The Independent*, 17 de junio de 1993. Las estimaciones provisionales de cómo los partidos ganarían o perderían por revisión de las demarcaciones sugerían que las primeras observaciones de los conservadores de ganar 15-20 escaños parecían exageradas. Por el contrario, los conservadores se beneficiarían con 4-6 escaños (basado en los modelos de voto de 1992) (*The Economist*, 25 de septiembre de 1993, pág. 35).

(87) MARTIN JACQUES: «Traditional links grow weaker in the chains of British Politics», en *Sunday Times*, 11 de julio de 1993.

tro de dos años; entonces, son aún mayores las posibilidades de que se produzca un *hung Parliament* en el que ningún partido tenga la mayoría o de que se forme un Gobierno laborista tras diecisiete años de oposición y sin ministros con experiencia de Gobierno. Como muchos de sus compañeros europeos, el Reino Unido está sufriendo aparentemente un período de radical reajuste político.

[Traducción de A. ELVIRA]